


banco multiva

Tendencias financieras
Pau Messeguer Gally

Director de Análisis Económico de Multiva

Paquete económico 2026: entre el déficit fiscal y la resiliencia del gasto público

La inflación irrumpió con fuerza y hoy, pese a su retroceso parcial, persiste una pregunta central: ¿qué precio deberá pagarse por alcanzar la estabilización macroeconómica? La senda de recuperación económica y el manejo de la deuda se han vuelto cruciales para definir la ruta de estabilidad futura. El aumento de los niveles de endeudamiento no fue casualidad, ya que representó la única manera de sobrellevar una recesión histórica y el choque económico global provocado por la pandemia. Ahora, la discusión se concentra en cómo lograr la consolidación fiscal en un entorno donde el vínculo entre la actividad económica real y la inflación se volvió más estrecho.

Es precisamente en este punto de inflexión que se inserta la divulgación del Paquete Económico 2026. El reto no es menor: reducir gradualmente el nivel del déficit para avanzar hacia la consolidación fiscal, manteniendo el compromiso de otorgar las ayudas y transferencias sociales que han sido el sello de esta administración. La relevancia del paquete trasciende la coyuntura porque establece el marco macroeconómico, define impuestos y estímulos, determina prioridades de gasto, autoriza endeudamiento y envía señales clave a inversionistas, calificadoras y mercados.

El pasado 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda, mandó al Congreso el Paquete Económico 2026 para su aprobación. En esta ocasión, la propuesta busca un equilibrio complejo: avanzar en la consolidación fiscal mientras se expande el gasto social a niveles históricos y se impulsan grandes proyectos de infraestructura e inversión pública, además de que, por primera vez, se incluye el plan de rescate financiero de Pemex, cuyos vencimientos de deuda representan una de las mayores presiones para las finanzas públicas en los próximos años.

El paquete 2026 contempla 987 mil millones de pesos destinados a programas sociales —equivalentes a un poco más de 2.5% del PIB—, que abarcan desde la ampliación de la pensión universal hasta la Pensión Mujeres Bienestar. A ello se suma una inversión en infraestructura y desarrollo regional equivalente a poco más de 2.5% del PIB, con proyectos de transporte, energía e hidráulicos.

Se propone dar continuidad al proceso de normalización gradual del déficit fiscal, ya que se proyecta su reducción para llegar a 4.1% del PIB en 2026 y que la deuda se estabilice en 52.3% del PIB, un nivel que, se asegura, no comprometerá la estabilidad financiera. Esto después de que en 2024 el déficit fiscal se ubicara en 5.7% del PIB.

El reto es evidente, ¿cómo reducir el déficit fiscal en

este escenario de gasto histórico? La respuesta de Hacienda es apostar, no a recortes, sino a incrementar los ingresos. Se proyecta un aumento de los ingresos de 6% anual. Para lograrlo, la estrategia descansa en una fiscalización más estricta, el combate a la evasión y elusión, la modernización de aduanas y una administración férrea de los recursos. En términos absolutos, se calculan 8.7 billones de pesos en ingresos totales, de los cuales 5.8 billones provendrían directamente de impuestos.

En un entorno de inflación todavía sensible y con el Banco de México en una fase de reducir gradualmente la tasa de referencia, un incremento fuerte del gasto social y del consumo puede comprometer el margen de maniobra de la política monetaria. Si la recaudación no cumple las expectativas, la presión sobre las finanzas públicas y sobre la política monetaria podría intensificarse al comprometer el margen de maniobra en un periodo crucial de transición.

Por ahora, el paquete ha sido recibido con buenos ojos en los mercados. S&P Global ratificó la calificación de la deuda soberana de México en BBB, con una perspectiva estable, lo que señala la confianza en la disciplina fiscal proyectada. No obstante, la verdadera prueba estará en la ejecución. En este contexto, la orientación de la política fiscal es determinante.

Llevar el gasto social a niveles históricos, junto con un compromiso de consolidación fiscal —se destinaría alrededor de 3.0% del PIB a programas sociales que beneficiarán directamente a 82% de los hogares—, en un contexto de crecimiento sólido de los fundamentos más relevantes del consumo, con el desempleo en mínimos históricos y avances en los salarios reales, puede contribuir a alimentar las presiones inflacionarias.

Aunque estas cifras contribuyen a la trayectoria de crecimiento proyectada, estimada entre 1.8 y 2.8% para 2026, también implican riesgos para la estabilidad macroeconómica, lo que obligaría al Banco de México a reconsiderar el ajuste gradual de la tasa de referencia para contrarrestar la inflación.

El verdadero reto será coordinar la política fiscal, los programas sociales y la política monetaria considerando el momento de transición y el contexto global en el que nos encontramos.


 Llama al (55) 5117 9000
(55) 5279 5858

 Sigue las redes sociales
como Banco Multiva

 Visita multiva.com.mx

 Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx